

A decorative border with intricate floral and scrollwork patterns in a dark blue color, framing the central text.

Círculo León
Trotsky

**El estado moderno,
desde la época feudal
hasta hoy**

Lutte Ouvrière

Con periodicidad, Lutte Ouvrière organiza en París conferencias denominadas Círculo León Trotsky. Estas conferencias abordan diversos temas políticos del pasado y del presente. Somos la única organización de la izquierda, y por ende de la extrema izquierda, que reúne regularmente, cada uno o dos meses, a casi mil participantes en París, sobre temas de cultura política. Estas conferencias se publican en forma de cuadernos y también están disponibles en nuestra página web, en versión original (francés) imprimible o en versión multimedia para las más recientes.

El Estado moderno, desde la época feudal hasta hoy

Un aparato de opresión al servicio de las clases dominantes, que los trabajadores tendrán que derrocar

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, hace un año y medio, algunos hablaron del " regreso del Estado ". Era el Estado, en calidad de garante de la salud pública, a quien correspondía organizar la lucha contra la epidemia. En este campo, como en todos los demás, nos dicen que el Estado representa el interés general.

De hecho, todos los políticos que compiten por la dirección de los asuntos públicos, en sea cual sea el país, y sea cual sea el partido del arco parlamentario al que representan, desde la extrema derecha hasta los partidos comunistas allí donde tienen representación parlamentaria, comparten y nos explican la idea de que el Estado podría defender un interés general compartido y todos ellos, individualmente, se presentan como los mejores representantes de sus poblaciones respectivas.

Es una mentira y una estafa política. ¿Qué interés común puede haber entre los empresarios que cierran fábricas para aumentar sus beneficios, y los trabajadores a los que despiden y privan así de su único medio de vida?

Este mito del interés común defendido por el Estado se propaga constantemente: nos enfrentamos a él en cada momento de nuestras vidas. Esto es lo que se nos enseña, desde la escuela hasta la universidad. Con este discurso se justifica el papel de la policía, los tribunales, el ejército... Se hace todo lo posible para convencernos de ello, no obstante, es un mito que es imprescindible combatir.

En este sentido, nunca, ningún Estado tuvo, en ningún lugar ni a lo largo de la historia, ese papel protector de los intereses de cada uno.

La existencia de un Estado, es decir, de un organismo responsable de la dirección de los asuntos públicos, situado por encima de la sociedad y dotado de medios de coerción, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de las sociedades humanas. Durante miles de años, mientras las sociedades se organizaron sobre una

base colectiva e igualitaria, prescindieron de tal estructura.

El Estado surgió al mismo tiempo que las clases sociales y la propiedad privada. Dividida en grupos con intereses contrapuestos e irreconciliables, la sociedad necesitaba entonces un árbitro que pusiera fin a los conflictos.

Este árbitro nunca ha sido neutro: en una sociedad con intereses sociales opuestos, siempre ha sido el representante de la clase dominante. En palabras de Engels, el Estado dispone de *“una fuerza pública formada no solo por hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles y las instituciones coercitivas de todo género”* cuyo papel consiste esencialmente en *“reprimir a la clase oprimida y explotada”*.

Para los trabajadores, es esencial comprender que nada pueden esperar de este Estado al servicio de sus explotadores, y que no puede ser otra de otra manera. Esto es aún más importante en este período de crisis del capitalismo, porque el futuro de toda la sociedad dependerá de la capacidad de los trabajadores para tomar realmente

el poder político y convertirlo en un instrumento de derribo de la burguesía.

La historia del nacimiento del Estado moderno, como instrumento de la dominación burguesa, nos ayuda a comprender por qué es ilusorio esperar un cambio pacífico y gradual del orden social y por qué es necesaria una revolución, para derrocar a la clase dominante y destruir su aparato estatal.

Nacimiento y auge de la burguesía en la Edad Media

La burguesía comenzó a desarrollarse dentro del sistema feudal que se había establecido gradualmente en Europa a partir del siglo V, tras la descomposición del Imperio Romano.

Tras un largo periodo de elevada agitación, el señorío se convirtió en la unidad básica de la vida social: el señor protegía a los campesinos que vivían en sus tierras y trabajaban para él; tenía el poder de policía y de justicia sobre ellos. Cada finca era casi autosuficiente y el comercio se reducía al mínimo. El rey era poco más que un señor como cualquier otro, a veces mucho menos poderoso que otros.

La esclavitud, que era la base de la economía en la antigüedad, acabó desapareciendo, dando paso a la servidumbre, que se fue extendiendo por gran parte de Europa occidental. A diferencia del esclavo, el siervo ya no era un mueble o un objeto, se le reconocía como hombre, la Iglesia le reconocía un alma, pero debía estar totalmente sometido al señor al que le debía jornadas de trabajo. El siervo

estaba vinculado a las tierras del señor, de las que no podía marcharse.

A partir del siglo XI, la sociedad comenzó a cambiar como consecuencia del resurgimiento del comercio. Los comerciantes traían especias de Oriente a Europa y vendían telas de Flandes en las ferias de cultivo. El hierro, extraído en Europa Central, se utilizaba para forjar espadas, que los señores necesitaban para sus torneos o guerras.

Comerciantes y artesanos formaron comunidades urbanas, tratando de obtener libertades, de romper los lazos de dependencia con los señores, reclamando el derecho a celebrar una feria o un mercado, o a no pagar impuestos por determinadas mercancías.

Estas ciudades exigieron el derecho a administrarse a sí mismas, a formar municipios, y algunos de ellos se convirtieron en verdaderas repúblicas burguesas, a veces oponiéndose violentamente a los señores locales, como en Le Mans a mediados del siglo XI y en Laon en 1112, por ejemplo; los burgueses de estos beneficios intentaron arrancar a la autoridad local —el conde en Le Mans, el obispo en Laon— las concesiones que

ésta se negaba a otorgar. En Le Mans, los burgueses fueron derrotados; en Laon, tras años de lucha, finalmente, obtuvieron satisfacción. En otros casos, y hubo muchos, tomó la forma de una transacción financiera. De hecho, había una gran variedad de situaciones.

En estos municipios, se creó una administración basada en los oficios. Sus habitantes juraron ayudarse mutuamente y "que uno ayudará al otro como a su hermano en lo que sea útil y honesto", por citar un juramento comunal de finales del siglo XII. Este juramento no era una simple fórmula. Otra carta de la misma época establecía, por ejemplo, que cuando se oía el grito de "Comuna", "los habitantes deben reunirse y correr en ayuda de quien lo ha lanzado", y que, de día o de noche, cuando se oía la campana del campanario, todos debían tomar las armas y correr hacia el alcalde. Se formaron milicias municipales, capaces de enfrentarse a los señores y hacerles frente.

En 1302, estalla una rebelión en todas las grandes ciudades de Flandes, en Brujas, Gante, Ypres, etc. Las milicias formadas por pequeños pañeros, tejedores y bataneros, que luchan a pie,

derrotan a la mejor caballería francesa en Courtrai. Más de 60 condes y barones y varios centenares de caballeros murieron en lo que se llamó la Batalla de las Espuelas de Oro, porque entre 500 y 700 espuelas de oro fueron tomadas de los pies de los caballeros muertos y colgadas como trofeos en la iglesia de Kortrijk.

Dentro de estas ciudades se desarrolló otra lucha, ésta de clases, que enfrentaba a los pequeños artesanos con la burguesía rica, a menudo comerciantes. En casi todas partes, esta burguesía rica monopolizaba las estructuras administrativas. A través de alianzas y matrimonios, las ciudades solían caer en manos de unas pocas grandes familias.

Estas luchas internas, que a veces tomaron un cariz muy violento, permitieron que los señores se inmiscuyeran en la administración de las ciudades, y que ciertas facciones burguesas buscaran su alianza para imponerse a sus rivales. Esta evolución contribuyó al declive del movimiento comunal a partir del siglo XIV.

En este periodo medieval, la burguesía seguía siendo demasiado débil, en un marco municipal demasiado estrecho, para permitirle

constituir una fuerza independiente. Frente a los señores, tuvo que buscar un aliado, y lo encontró en la cima del orden feudal, en la realeza. Por su parte, los reyes se apoyaron en la burguesía para imponer su autoridad a la nobleza.

En Francia, por ejemplo, en el siglo XIII, el rey Felipe el Hermoso convocó a un gran número de hombres de la burguesía para crear un cuerpo administrativo independiente de los grandes señores del reino. Fue un periodo en el que se redescubrió el derecho romano. Las costumbres feudales variaban de una región a otra, legitimando la autoridad local del señor. El derecho romano se había desarrollado en una época en la que existía una autoridad pública central indiscutible y reconocida. De este modo, podía proporcionar una base legal para que un monarca impusiera su voluntad a todos los súbditos de su reino. Los legistas, como se llamaba a los hombres de los que se rodeaba Felipe el Hermoso, eran todos de la burguesía y habían estudiado este derecho romano. Fueron los antecesores de la alta función pública actual. Por primera vez, un simple burgués fue nombrado Garde des Sceaux (guardia de los sellos reales, equivalente hoy a ministro de la

justicia), convirtiéndose en el controlador del órgano administrativo que el rey acababa de crear.

En el sistema feudal, el ejército de un señor estaba formado por sus vasallos y sus hombres, que le habían jurado lealtad y, como consecuencia, le debían un servicio militar limitado a 40 días. También en este aspecto, el rey era un señor como cualquier otro y no tenía ningún poder especial. Para poder llevar a cabo una política independiente de los señores y ponerlos a raya, el poder real debía contar con un ejército permanente a su servicio. Para hacer frente a esos gastos, tuvo que subir los impuestos. Y ¿a quién mejor encomendar esta tarea sino a hombres cuya especialidad, por no decir su razón de ser, era el manejo del dinero, es decir, a la burguesía?

En Francia, Jacques Coeur, hijo de un comerciante y comerciante él mismo, se convirtió en 1439 en el tesorero del rey Carlos VII. Ocupó este cargo hasta su caída en 1451. Mientras, sus asuntos personales prosperaron. Su título de tesorero le situó al frente de las finanzas reales, y también se convirtió en el proveedor de la corte, lo que hizo con gran provecho. Sus establecimientos comerciales

estaban repartidos por toda Francia: tenía algunos en Ruán, centro de su comercio con Inglaterra y Flandes, en Lyon para el comercio con Alemania y Europa del Este, y en Marsella desde donde partían las mercancías destinadas a Oriente, España e Italia. Sus minas de cobre y plomo plateado le convirtieron en uno de los grandes industriales de la época. Finalmente, obtuvo del Papa el privilegio de transportar peregrinos a Oriente en sus galeras, lo que le permitió desarrollar un importante comercio de armas y esclavos con el sultán de Egipto. Convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de su tiempo, cometió el error de contrariar al rey, que hizo embargar su fortuna y lo encarceló. Jacques Coeur logró escapar y terminó su vida en el exilio.

Así, el destino y la fortuna de estos grandes burgueses seguían dependiendo totalmente de la gracia real. En el mundo feudal, la propiedad burguesa no era ni sagrada ni inviolable. Si el poder real buscó la alianza de la burguesía, no fue para darle poder, y muchos burgueses lo experimentaron cruelmente.

Al final de esta evolución, a finales del siglo XV, se habían establecido estados monárquicos en

toda Europa. Se convirtieron en el caldo de cultivo de la burguesía en el siguiente periodo.

Los principios del capitalismo y el papel de la monarquía absoluta

La apertura de nuevas rutas marítimas hacia Oriente, el descubrimiento de América y su conquista por parte de las monarquías española y portuguesa fue un paso decisivo en el desarrollo del capitalismo. El oro y la plata de las Américas llegaron a Europa. El comercio se expandió a una nueva y desconocida escala.

La abundancia de metales preciosos permitió a la monarquía española alcanzar la cima de su poder en el siglo XVI. Pudo financiar el lujo y la pompa de su corte, y durante más de un siglo se agotó en guerras por todo el continente europeo. El oro y la plata de las arcas reales españolas aseguraron el desarrollo de las burguesías de Europa, especialmente las del norte de Europa occidental, en Flandes y Holanda. Una larga revuelta de las poblaciones de estas regiones, encabezada por estas capas burguesas, hizo tambalear la tutela que el rey español intentaba imponerles. Esta lucha adquirió un carácter religioso: los ejércitos españoles defendían a la Iglesia católica contra las ideas de la Reforma, que los insurgentes reivindicaban. En una

época en la que la Iglesia dominaba toda la vida social y política, era inevitable que cada bando encontrara en la religión la justificación de su lucha.

Tras décadas de guerra, Holanda consiguió finalmente la independencia a finales del siglo XVI. En este nuevo Estado con instituciones republicanas, la burguesía asumió la dirección de los asuntos públicos.

La flota holandesa, que empleaba a más marineros que las de España, Francia e Inglaterra juntas, hizo que este pequeño país de 2,5 millones de habitantes dominara los mares durante gran parte del siglo XVII y tuviera prácticamente el monopolio del comercio con Extremo Oriente.

Como potencia comercial, también desarrolló actividades de transformación: industria de la lana, tinte y tejido de la seda, tallado de diamantes, pulido de óptica, fabricación de microscopios, relojes e instrumentos de navegación, elaboración de mapas terrestres y marítimos, impresión de libros en todos los idiomas... La ciudad de Ámsterdam se convirtió en el gran centro financiero de la época.

Recogiendo una frase de Marx, Holanda fue, en la primera mitad del siglo XVII, la nación capitalista por excelencia.

Las guerras que tuvo que librar contra Inglaterra y Francia acabaron por debilitar a la burguesía holandesa y le hicieron perder su posición dominante. Para establecerse a largo plazo, necesitaba un Estado capaz de librar guerras y conquistar y defender los asentamientos comerciales coloniales en Asia y África. Fue la gran época del mercantilismo, que consistía en una política proteccionista basada en verdaderas guerras aduaneras.

En Francia, esta política fue aplicada por Colbert, uno de los principales ministros de Luis XIV, responsable tanto de las finanzas como de la marina del reino. El Estado desarrolla los astilleros y los puertos, mejorando los existentes, como Brest y Toulon, y creando Rochefort. Los impuestos se aplicaban a las mercancías importadas por buques extranjeros. Para Colbert, en esta guerra económica, las compañías comerciales eran "los ejércitos del rey y las fábricas de Francia sus reservas". Una fábrica reunía a decenas, incluso cientos de artesanos en un

mismo lugar. Cada uno se dedicaba a la misma actividad que los demás, pero el simple hecho de reunirlos simplificaba muchos problemas de abastecimiento y, por tanto, aumentaba su productividad. Se crearon más de 400 fábricas, algunas financiadas por ciudadanos ricos y otras con fondos públicos. Tanto si son de propiedad privada como si están bajo administración real, todas tienen en común el hecho de que se les concedan monopolios de producción o de venta. Se trataba de productos de lujo: tapices y la porcelana; de productos básicos: hierro y acero, papel y armamento; de productos cotidianos: tejidos y sábanas.

Las revoluciones burguesas en Inglaterra y en Francia

Durante este periodo, las monarquías francesa e inglesa aplicaron políticas que favorecieron el desarrollo de la burguesía, con la intención de apoyarse en esta clase para fortalecerse frente a la nobleza. Pero esta alianza no evolucionó de la misma manera en los dos países.

En Inglaterra, el intento del rey Carlos I de reforzar su autoridad contó con la oposición, a partir de 1640, de su Parlamento, apoyado por una coalición de la clase burguesa y la baja nobleza. Esta crisis política acabó desembocando en una auténtica guerra civil en la que ganó el ejército del Parlamento, dirigido por Cromwell. El rey depuesto fue decapitado en 1649. Una vez más, los bandos alegaron ideologías religiosas, siendo el rey católico y sus oponentes protestantes. Pero fue una revolución burguesa, con la apuesta de la burguesía por el ejercicio del poder al frente del Estado.

En aquellos años, la burguesía inglesa aún no estaba lo suficientemente desarrollada como para tomar el poder en solitario. La revolución inglesa

condujo a un compromiso entre la nobleza y la burguesía, que se tradujo en el establecimiento de una monarquía parlamentaria a partir de 1688. La nobleza y la burguesía compartían el poder hasta el punto de fusionarse gradualmente, formando una clase cuyo poder se basaba tanto en las actividades comerciales como en la propiedad de la tierra.

En Francia, la situación tomó una dirección diferente. Apoyándose en la burguesía, la monarquía consigue reforzarse y, bajo Luis XIV, el poder del rey se convierte en absoluto e incontestable. La nobleza fue completamente domesticada, los señores más poderosos se transformaron en cortesanos reunidos en el Palacio de Versalles. En cuanto a la burguesía, algunos de ellos se integraron en el Estado comprando puestos administrativos, siendo, las oficinas de finanzas, justicia y policía las más solicitadas. Como estos cargos eran transmisibles a los herederos, se formó una nobleza de toga, de origen burgués, que se convirtió en uno de los pilares de las instituciones del régimen.

Entre la burguesía más rica, algunos supieron crear vínculos privilegiados y ventajosos con el Estado. Entre ellos se encontraba Ignace François

de Wendel, propietario desde principios del siglo XVIII de la fragua de Hayange, donde, en 1769, se realizaron las primeras pruebas para sustituir el carbón vegetal por coque en los altos hornos, una tecnología que revolucionó la industria siderúrgica y que se desarrolló en Inglaterra en esos años. Fue con el inglés Wilkinson con quien el mismo de Wendel creó una fundición en Le Creusot en 1789 para producir cañones para la marina. Logrando obtener el apoyo de la mayoría de los financieros de la época, los dos hombres crearon una sociedad anónima con un capital considerable, en la que también participaron el Tesorero General de la Guerra, el Tesorero General de la Marina, el Intendente Real a cargo de los Ejércitos y el Correo. Esto era útil para obtener pedidos militares.

Pero este estado seguía siendo dominado por la nobleza. En un país con 26 millones de habitantes a finales del siglo XVIII, esta clase de unas 300.000 personas hacía tiempo que había dejado de tener un papel económico. Viviendo como parásitos, la nobleza consideraba que trabajar era deshonorarse. Pero no tenían intención de renunciar a nada de su dominio y se aferraban a sus privilegios, heredados de la época del feudalismo. En el ejército, los

puestos de oficiales estaban reservados para ellos. En el clero, los obispos eran todos nobles. Seguían ocupando un lugar destacado en las altas esferas del Estado, y para alcanzar un puesto bien remunerado había que ser lacayo de un príncipe.

Frente a la nobleza, la burguesía exigía, con cada vez más firmeza, su participación en la gestión del Estado y en la administración del país. Tenía ante sus ojos el modelo de la monarquía inglesa, donde su rival, la burguesía inglesa, había sido capaz de imponer límites al poder real y abrir las puertas al poder político.

En 1789, ante los problemas financieros, el rey convocó una reunión de representantes de toda la población, los Estados Generales, para votar nuevos impuestos. Este fue el punto de partida de una movilización revolucionaria. La burguesía tomó primero la iniciativa y obtuvo rápidamente lo que quería: una constitución, una reorganización administrativa, que incluía la supresión de las aduanas interiores y la unificación de pesos y medidas, lo que permitió la creación de un mercado interior. Se habría conformado con un compromiso con la monarquía y los nobles liberales. Pero ni el rey

ni la mayoría de los nobles lo aceptaron. Y sin la movilización del pueblo, de los campesinos, de los artesanos de las ciudades, de los llamados *sans-culottes*, la burguesía no habría podido ganar. Como resumió Engels: "*A partir de la toma de la Bastilla, la plebe tuvo que hacer todo el trabajo para la burguesía. Sin su intervención [...], el Antiguo Régimen habría derrotado a la burguesía*".

Estas masas revolucionarias, que acudieron al combate gritando "Libertad o muerte", "Guerra en los palacios, paz en los cortijos", inspiraron un profundo temor social en los estratos más ricos de la sociedad. Pero esta modesta gente de las ciudades y del campo no fue capaz, en aquel momento, de impedir que la burguesía tomara el poder.

La estabilización del nuevo régimen político y social sólo se logró cuando Napoleón Bonaparte llegó al poder mediante un golpe militar en 1799. Estableció un régimen cada vez más personal hasta proclamarse emperador. Al redactar el Código Civil, que permaneció prácticamente inalterado durante mucho tiempo, sacralizó la propiedad privada, consolidando lo que era esencial a los ojos de la burguesía. Bajo su dirección, el Estado adquirió la

estructura y la organización administrativas que ha conservado hasta hoy y que lo convirtieron en un instrumento de la dominación burguesa, enteramente dedicado a la defensa de sus intereses.

El papel de los Estados en la revolución industrial

Inglaterra fue el primer país en el que la burguesía llegó al poder y, en consecuencia, el primero en llevar tan lejos la revolución industrial asociada al desarrollo del capitalismo.

La expansión de los avances tecnológicos, como la máquina de vapor y el desarrollo de nuevos telares, propició la aparición de hilanderías y ferrerías, que empleaban a varios cientos e incluso miles de trabajadores.

El Estado desempeñó un papel importante, no sólo en el apoyo político y militar a la expansión comercial, sino también en la represión de todo tipo de revueltas obreras. Para oponerse a la introducción de nuevas máquinas que consideraban responsables de su ruina, los artesanos se organizaron para destruirlas. Una ley de 1769 introdujo la pena de muerte por dicha destrucción. En 1799, se prohibieron todas las coaliciones de trabajadores.

El Estado también tuvo que intervenir para imponer algunas reglas a los capitalistas. Así, la red

ferroviaria fue construida exclusivamente por empresas privadas, cada una de las cuales construyó independientemente de las demás. Al estar en competencia, cada red mantuvo sus propias locomotoras y equipos de conducción, su señalización y sus prácticas profesionales celosamente guardadas. Y lo que es peor, el ancho de las vías difería de una región a otra. En 1845, el gobierno británico se vio obligado a aprobar una ley que imponía un ancho de vía único.

Por delante de todos los demás países, Inglaterra se convirtió realmente en el taller del mundo. Cuando la burguesía inglesa se sintió lo suficientemente fuerte como para dominar el mercado mundial, abandonó la política proteccionista del periodo anterior y se convirtió en una ferviente defensora del libre comercio, que le garantizaba el acceso a los mercados de otros países.

Frente a esta dominación inglesa, para desarrollarse, las demás burguesías de Europa necesitaban absolutamente el apoyo de un Estado liberado de los grilletes del feudalismo. Mientras que en Francia se había producido una revolución

burguesa, en el resto de Europa los Estados seguían ligados a los viejos y aristocráticos poderes.

Incluso Francia había visto la restauración de una monarquía después de 1815 y la derrota de los ejércitos de Napoleón. Los nobles habían vuelto con la voluntad de recuperar su protagonismo, pero tuvieron que aceptar entenderse con la burguesía. En 1830, en París, tres días de disturbios, apoyados por una parte de la burguesía, condujeron a la salida del muy reaccionario rey Carlos X, representante de esta aristocracia que no había aprendido ni entendido nada. Fue sustituido por otro monarca, Luis Felipe, que encarnaba el "rey burgués". Guizot, primer ministro entre 1840 y 1848, proclamó en un discurso ante la Asamblea "Enriqueceos", dirigiéndose a la burguesía. Y para garantizar este enriquecimiento, no se contentó con discursos. Su gobierno aprobó una ley en 1842 para acelerar el desarrollo de los ferrocarriles. El Estado aportó los terrenos, financió la construcción de las infraestructuras, se comprometió a pagar los intereses de los préstamos de las empresas en caso de déficit y garantizó los ingresos de los bonos emitidos por las empresas.

En la participación al capital de las empresas se encontraban los principales nombres de la banca parisina, con la que el régimen estaba estrechamente vinculado. Pero una gran parte de la burguesía siguió excluida del poder, privada incluso del derecho de voto reservado únicamente a las capas más ricas. Su descontento y su movilización para obtener una ampliación del derecho de voto contribuyeron al estallido de la revolución de 1848.

El fracaso de las revoluciones de 1848

Ese año, toda Europa se vio sacudida por una ola revolucionaria en la que participaron todos aquellos que querían deshacerse del viejo orden social heredado de la época feudal. En el caso de Alemania e Italia, el objetivo de estas revoluciones era llevar a la burguesía al poder para lograr la unidad nacional, deshacerse de los restos del feudalismo y desarrollar el capitalismo.

Estas revoluciones fracasaron en todas partes, porque la burguesía se vio frenada por su miedo al proletariado y acabó refugiándose al amparo de los poderes autoritarios. En Francia, la lucha enfrentó al proletariado y a la burguesía. Ésta, después de haber aplastado al proletariado, prefirió renunciar a las instituciones republicanas y aceptó finalmente la instauración del régimen imperial de Napoleón III. En Alemania y Austria se restablecen los regímenes monárquicos.

Marx y Engels esperaban que en algún momento de la movilización revolucionaria de este período el proletariado se encontrara en condiciones de disputar el poder. Años más tarde, extrayendo lecciones políticas de este periodo, Engels escribió:

“La historia nos ha dado un mentís, a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido. Ha puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo económico en el continente distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción capitalista; lo ha demostrado por medio de la revolución económica que desde 1848 se ha adueñado de todo el continente, dando, por vez primera, verdadera carta de naturaleza a la gran industria en Francia, Austria, Hungría, Polonia y últimamente en Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de primer orden. Y todo sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en 1848, gran capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente esta revolución industrial la que ha puesto en todas partes claridad en las relaciones de clase”.

Estas revoluciones industriales exigían la eliminación de los obstáculos que representaba el mantenimiento de las estructuras feudales. La burguesía no pudo imponerlo "desde abajo", a la manera de los revolucionarios de 1789. Estas reformas, indispensables para el desarrollo de la economía, fueron pues realizadas "desde arriba",

por los Estados dictatoriales consolidados por el fracaso de las revoluciones de 1848.

En Francia, el régimen del Segundo Imperio favoreció el desarrollo de las sociedades anónimas, los ferrocarriles y la industria en su conjunto. En Alemania, fue Bismarck, primer ministro del rey de Prusia, representante de la capa especialmente reaccionaria de los grandes terratenientes, quien logró la unidad del país bajo su autoridad, creando así el mercado interno del que la burguesía alemana había carecido hasta entonces.

En Estados Unidos y Japón, las últimas revoluciones industriales

Al mismo tiempo, otros dos países, Estados Unidos y Japón, fueron capaces de seguir el mismo camino, hasta un nivel que les permitió entrar en el club de élite de las grandes potencias industriales.

Estados Unidos se había formado agrupando las antiguas colonias británicas de América del Norte y había conseguido su independencia tras más de ocho años de guerra. Pero tras casi un siglo de existencia, el país estaba profundamente dividido. En el Norte dominaba una burguesía industrial y en el Sur una capa de grandes terratenientes cuya fortuna se basaba en la economía de plantación y en la esclavitud, heredada del periodo colonial. La Guerra Civil, de 1861 a 1865, permitió a la burguesía del Norte unificar el país y, al abolir la esclavitud, establecer la base legal para el ascenso de los capitalistas, que iban a disponer de una mano de obra "libre" para explotar.

En los años posteriores, la conquista del Oeste, las guerras contra las poblaciones indígenas desposeídas de sus tierras y la llegada de millones

de inmigrantes europeos permitieron al Estado americano construir un país con dimensiones de continente. La burguesía estadounidense se benefició así de oportunidades de desarrollo mucho mayores que sus competidores.

Simultáneamente, en Japón, el Estado llegó a sustituir a una burguesía casi inexistente para evitar estar bajo la tutela de las potencias europeas. Japón quería evitar el mismo destino que China, que se vio obligada a abrir completamente su mercado tras las Guerras del Opio.

A partir de 1867, el emperador japonés Mutsuhito lanzó a su país en el Meiji, el Siglo de las Luces. Sometió a los grandes señores feudales y construyó poco a poco una monarquía fuerte. Abolió los feudos, pero los campesinos tuvieron que compensar a sus antiguos señores, que siguieron al frente de grandes fincas.

El Estado inició la industrialización del país sin recurrir al capital extranjero y sin dejarlo entrar en el país. Después de 1880, cedió al sector privado las empresas que había creado. Se formaron grandes conglomerados, en manos de unas pocas familias

adineradas, que controlaban la inversión y la producción en todos los sectores modernos.

Ello dio lugar a la aparición de una clase capitalista, resultado de la transformación de los estamentos aristocráticos, que siguieron marcando la sociedad con sus rasgos más reaccionarios.

El movimiento obrero y su política frente a la burguesía y sus Estados

En el Manifiesto Comunista, Marx comenzó describiendo el papel revolucionario de la burguesía en la lucha por eliminar el viejo sistema social del feudalismo. Para Marx, el proletariado debía participar en estas luchas, sin ser neutral, en el campo que luchaba contra las fuerzas aristocráticas. Pero debía hacerlo conservando su independencia política, para poder librar su propia lucha contra la burguesía, para derrocarla.

Mientras la burguesía desempeñó un papel progresista en la historia de las sociedades, rompiendo las cadenas del régimen feudal y demostrando ser capaz de llevar a cabo revoluciones industriales en Europa, América y Asia, la intervención del Estado para apoyar su desarrollo también fue progresista. Las autoridades aplicaron políticas de salud pública y llevaron a cabo una planificación urbana en las grandes ciudades para combatir el riesgo de epidemias. Se preocupaban por alfabetizar a una gran parte de la población, para dotar a la burguesía de una mano de obra cada vez más cualificada.

Sin embargo, Marx y los revolucionarios de los movimientos socialistas que siguieron sus ideas siempre se negaron a dar cualquier apoyo a los Estados que defendían los intereses de la burguesía.

En Francia, por ejemplo, en la década de 1880, las leyes escolares establecieron la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza primaria, lo que fue muy útil para el desarrollo de una economía moderna. Estas medidas también pretendían quitarle a la Iglesia el cuasi monopolio de la educación, una de sus funciones tradicionales. Los republicanos burgueses intentan así debilitar la influencia de los partidarios de una restauración monárquica, que son mayoría en el seno del clero. Pero la escuela republicana era también una escuela de patriotismo, que encomendaba a los profesores la misión de formar a los futuros soldados dispuestos a morir por los intereses de los propietarios: marchar al paso, aprender a manejar las armas y los ejercicios de tiro formaban parte de la vida cotidiana de los escolares. Esta Segunda República era el Estado de la burguesía, el que había aplastado con sangre la Comuna de París en 1871.

En Alemania, el régimen dirigido por Bismarck aplicó una política muy represiva para intentar destruir el movimiento socialista. A partir de 1878 entró en vigor una ley de emergencia antisocialista que prohibía los mítines, las manifestaciones públicas y la prensa socialista, y que preveía el encarcelamiento y la prohibición de residencia de los activistas en determinadas ciudades y regiones. Pero la ley no impedía que los socialistas se presentaran a las elecciones y ocuparan escaños en el Reichstag, el parlamento.

Simultáneamente a esta "política del látigo", Bismarck también llevó a cabo lo que llamó, con su característico desprecio social, una "política del terrón de azúcar". Hizo que el Reichstag aprobara leyes sobre el seguro de enfermedad en 1883, una ley de seguro de accidentes en 1884, e incluso una ley de seguro de vejez en 1889. Con la introducción de la legislación social más avanzada para la época, Bismarck intentaba contrarrestar la difusión de las ideas socialistas entre los trabajadores y fomentar el desarrollo de corrientes dentro del movimiento obrero que, a diferencia de los socialistas, estaban dispuestas a apoyar el régimen.

Es evidente que esta política no logró ninguno de sus objetivos antes de 1914. El joven Partido Socialdemócrata, dirigido por Bebel y Liebknecht, partidarios de las ideas de Marx y Engels, consiguió organizarse para difundir sus ideas a pesar de la represión, y continuó su progreso electoral, consiguiendo cada vez más diputados. En el Reichstag, los representantes de los socialdemócratas no votaron a favor de las leyes sociales de Bismarck, negándose a darle su apoyo. "Ni un céntimo, ni un hombre para este gobierno" era el lema de los socialdemócratas alemanes. Su objetivo era luchar por el derrocamiento de las clases dominantes y la toma del poder por el proletariado.

Durante este periodo se desarrolla el movimiento obrero, basado en la combatividad de los trabajadores, los movimientos de huelga y la creación en Europa y Estados Unidos de organizaciones sindicales. Se crean partidos socialistas que se agrupan a partir de 1889 en la Segunda Internacional, cuyo programa es el de la revolución social y las ideas internacionalistas. También existía una corriente en el movimiento socialista que quería limitar la lucha de los trabajadores a la obtención de reformas en el marco

del capitalismo, sin pretender derrocarlo. Aunque el programa de la Segunda Internacional seguía siendo el de la revolución social, las ideas reformistas encontraban cada vez más partidarios. Se convirtieron en la expresión política de los intereses de la burocracia, cuyo desarrollo dentro del movimiento obrero fue en sí mismo la consecuencia de una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo con el imperialismo. Las burguesías más poderosas disponían entonces de medios para mejorar las condiciones de vida de una fracción de la clase obrera, incorporando al mismo tiempo a una parte de sus dirigentes políticos y sindicales en sus instituciones.

A finales del siglo XIX, el capitalismo ha llegado a la fase imperialista de su desarrollo

Como consecuencia de la competencia y de la necesidad de generar concentración se formó, en todos los sectores, un pequeño número de empresas gigantes, o trust, que se encontraron en una posición de cuasi monopolio y pudieron así ponerse de acuerdo para limitar los efectos de la competencia, o incluso acabar con ella durante un tiempo, repartiéndose los mercados y fijando los precios.

En Francia, en 1912, las diez primeras empresas siderúrgicas controlaban más del 70% del capital total de la industria siderúrgica, nueve empresas producían el 80% de la producción total de carbón. En Estados Unidos, en 1900, los trusts representaban el 50% de la producción textil, el 62% de la producción alimentaria y más del 80% de la producción de productos químicos, hierro y acero.

Esta evolución general tuvo importantes consecuencias y marcó una nueva etapa para el capitalismo, la etapa imperialista de su desarrollo. Analizando este nuevo período, Trotsky escribió: “La

eliminación de la competencia por el monopolio señala el comienzo de la desintegración de la sociedad capitalista. La competencia era el principal resorte creador del capitalismo y la justificación histórica del capitalista. Por lo mismo, la eliminación de la competencia señala la transformación de los accionistas en parásitos sociales.”

El imperialismo era el capitalismo en su fase senil, en la que se afirmaban cada vez más todas las contradicciones de este sistema, que podían obstaculizar el desarrollo económico. El capital de la libre competencia ha conducido a la concentración del capital y a los monopolios; el capital industrial y el bancario se han convertido en un mismo capital financiero que domina toda la economía.

En Estados Unidos se formaron dos imperios financieros, uno por el multimillonario First National Bank de Morgan y el otro por el multimillonario National City Bank de Rockefeller. Entre los dos, controlaban una gran parte de la economía estadounidense.

Con el imperialismo, es la financiarización de la economía la que comienza a manifestarse. A principios del siglo XX, Gran Bretaña ya no era la

primera potencia industrial: había sido ampliamente superada por Estados Unidos y Alemania. Pero seguía siendo, con diferencia, el mayor inversor del mundo. Ya no era el comercio sino las actividades financieras lo que la mantenía como primera potencia económica en vísperas de 1914. Cuando los beneficios ya no provienen del desarrollo de las fuerzas de producción, significa que la propia clase dominante dentro de este sistema se convierte en una clase cada vez más parasitaria, distrayendo más riqueza de la que es capaz de crear.

La competencia entre las burguesías condujo a un regreso generalizado del proteccionismo en Europa, en el que cada uno protegía su mercado interno, que pronto resultó demasiado pequeño. Se hizo imprescindible encontrar salidas externas para las mercancías y, aún más, para el capital.

Esta necesidad de conquistar nuevos mercados fue el motor de la contienda por las colonias por parte de las grandes potencias de la época. En Francia, Jules Ferry, cuyo nombre se asocia a las leyes escolares ya mencionadas, fue también uno de los más empeñados en la colonización, sobre todo en Asia, lo que le valió el

apodo de "el Tonkinés". En uno de sus discursos de 1885, dijo claramente: "La política colonial es la hija de la política industrial", o también: "Una colonia es una salida".

Mediante la fuerza, el terror, con la masacre de poblaciones en Asia y África, con la política de las cañoneras, todas las grandes potencias europeas trataron de construir imperios coloniales y compitieron por incrementar sus áreas de influencia. A principios del siglo XX, las burguesías posteriores entraron en la carrera por los mercados, mientras que sus competidores ya se habían repartido el mundo. Este fue el caso, en particular, de la burguesía alemana que, para encontrar salidas acordes con el desarrollo de su industria —que se había convertido en la mayor de Europa— tuvo que imponer un nuevo reparto del mundo.

Esto condujo a una mayor competencia económica y financiera y a la exacerbación de las rivalidades nacionales. En todas partes se incrementó el gasto militar. En Francia, en 1908, el gasto militar representaba más de un tercio del gasto total del Estado. En Gran Bretaña, representaba casi la mitad. En cada país, éste proporcionó nuevas

oportunidades a los industriales. También proporcionó a los militares los medios para nuevas conquistas. Pero detrás de los militares estaba la dinámica de los imperialismos en competencia que condujo inexorablemente a la Primera Guerra Mundial en 1914.

Los estados burgueses, instrumentos de la dictadura del gran capital

En la etapa imperialista del capitalismo, en el conjunto de los países más desarrollados, las grandes empresas capitalistas adquirieron un poder económico y social que las colocó en posición de dictar sus exigencias a los Estados. Se produjo una verdadera fusión entre el capital financiero y el aparato estatal, que se convirtió cada vez más en el instrumento de la dictadura del gran capital. La Primera Guerra Mundial aceleró enormemente esta evolución.

En todos los países implicados en el conflicto, el Estado tuvo que intervenir directamente para crear una economía de guerra. El Estado tenía que organizar la distribución de las materias primas, cuando no tenía que comprarlas él mismo. También debía garantizar que las industrias consideradas esenciales tuvieran la mano de obra necesaria. De hecho, en las primeras semanas de la guerra, tanto en Francia como en Alemania, la movilización general provocó el vaciado de las empresas de sus trabajadores, y muchas, prácticamente, se paralizaron. Los gobiernos y los estados mayores no

habían previsto que la guerra pudiera durar más de unos meses.

Posteriormente, los trabajadores movilizados fueron asignados a las empresas. En Francia, en octubre de 1915, se instituyó un verdadero estatuto para los trabajadores militares. Estaban bajo la autoridad de los militares, debían vivir en la localidad donde se encontraba la empresa a la que estaban destinados y debían llevar un distintivo.

El Estado se encargó así de planificar la producción, racionalizarla y estandarizarla con el fin de obtener una mayor eficacia. Sin embargo, no desafió el poder de los capitalistas. Por el contrario, lo hizo cooperando con las empresas más poderosas. Se garantizaban altos beneficios fijando precios elevados. No obstante, los Estados se vieron obligados a introducir mayores controles. En Alemania, por ejemplo, el Ministerio de Guerra decidió regular las exportaciones en el otoño de 1916 después de que fuera evidente que el hierro y el acero alemanes se entregaban a Francia e Italia a través de países neutrales.

Incluso cuando el Estado financiaba la construcción de fábricas, éstas seguían siendo

propiedad de los capitalistas. En Francia, por ejemplo, el industrial André Citroën hizo construir en seis semanas una fábrica de obuses en el Quai de Javel de París, pagada íntegramente con fondos públicos. Otro fabricante de automóviles, Louis Renault, se convirtió rápidamente en un interlocutor privilegiado del ministro de la Guerra, produciendo en sus fábricas acero, motores, municiones, los primeros tanques... Todo era bueno porque los beneficios estaban ahí.

A partir de 1917, la administración llegó a imponer la especialización a las empresas más pequeñas, que se vieron obligadas a trabajar como subcontratistas de las más grandes. Frente a la irresponsabilidad de una clase de aprovechados preocupados exclusivamente por sus propios intereses, el Estado tuvo que organizar y planificar la economía para llevar a cabo el esfuerzo bélico, es decir, para que millones de hombres pudieran aniquilarse en los campos de batalla.

Cuando los líderes reformistas se convierten en ministros

Los dirigentes de los Estados europeos eran conscientes de que la guerra podía provocar una rebelión. Por ello, trataron de conseguir el apoyo de los dirigentes del movimiento obrero. De hecho, no tuvieron ninguna dificultad para obtenerla en la mayoría de los países imperialistas donde, para utilizar la frase de Trotsky, ya no era la resolución de la cuestión social lo que preocupaba a los dirigentes de los partidos socialistas y de los sindicatos, sino su propia situación social. Esta capa de diputados, concejales, gerentes de cooperativas, periodistas y burócratas sindicales estaba muy dispuesta a participar en la Unión Sagrada, sobre todo porque esto ofrecía nuevas perspectivas de progreso social.

Desde el comienzo de la guerra, la gran mayoría de los dirigentes del movimiento obrero pasaron del lado de su burguesía, apelando los obreros a marchar para el frente, participando en el desencadenamiento de la propaganda patriótica, impidiendo que se expresara cualquier protesta, colaborando a todos los niveles con las autoridades y los patrones de las empresas.

En Francia, ya en agosto de 1914, tres socialistas entraron en el gobierno. Uno de ellos, Albert Thomas, primero como Subsecretario de Estado de Municiones y luego como Ministro de Armamento desde diciembre de 1916, organizó la economía de guerra en estrecha colaboración con los empresarios. También estaba en condiciones de convocar a los sindicalistas para evitar las huelgas.

En Inglaterra, los sindicatos pidieron una tregua industrial, es decir, el aplazamiento de todas las reivindicaciones. Los laboristas sólo pudieron sentarse en un gobierno de unidad nacional desde mayo de 1915. En Alemania, los dirigentes del Partido Socialdemócrata fueron privados de puestos ministeriales hasta el final de la guerra, aunque esto no impidió que la mayoría de ellos mostrara una devoción indefectible por los intereses de su burguesía.

La revolución que estalló en Rusia en 1917 demostró que los temores de la burguesía estaban totalmente justificados. Por primera vez a escala nacional, el proletariado tomó el poder bajo la dirección del Partido Bolchevique, uno de los únicos partidos de la Segunda Internacional que se

mantuvo fiel a las ideas socialistas e internacionalistas. A la cabeza del primer Estado obrero, los bolcheviques se veían a sí mismos como la vanguardia de la revolución mundial. Al final de la guerra, una ola revolucionaria recorrió Europa y sacudió el poder de la burguesía en muchos países. Con la creación de la Tercera Internacional, los bolcheviques intentaron construir un verdadero partido mundial de la revolución, indispensable para que la clase obrera venciera a escala internacional. Eran conscientes de que el tiempo era escaso y de que había una carrera.

En cambio, fue la contrarrevolución la que se impuso en todos los países donde se libraron batallas decisivas. Los partidos socialistas, que habían traicionado en 1914, utilizaron la influencia que conservaban entre los trabajadores para desempeñar el papel de garantes del orden social, llegando, como en Alemania, a dirigir ellos mismos el estrangulamiento de las movilizaciones revolucionarias. A partir de 1920, la perspectiva de una victoria proletaria fuera de Rusia se volvió remota y el Estado soviético se encontró dramáticamente aislado, reducido a poder confiar sólo en sus propias fuerzas. El fracaso de esta

oleada revolucionaria influyó en la evolución del propio régimen soviético, favoreciendo su degeneración burocrática y el establecimiento de la dictadura estalinista. Bajo la dirección de Stalin el Estado soviético dejó de ser un factor revolucionario para actuar cada vez más como agente de mantenimiento del orden imperialista.

Las derrotas del proletariado y la reactivación de la economía permitieron al mundo capitalista experimentar una relativa estabilización durante algunos años. Durante diez años, aprovechando el debilitamiento de sus competidores europeos, el imperialismo estadounidense experimentó un gran auge, actuando como locomotora de toda la economía mundial. Pero las contradicciones que habían conducido a la Primera Guerra Mundial seguían actuando y esta estabilización sólo podía ser temporal. La crisis económica de los años 30 y la posterior marcha hacia la guerra condujeron a la intervención estatal a una escala aún mayor en todas partes.

El nazismo en Alemania

Los tratados de paz impuestos por los vencedores privaron a Alemania de todas sus colonias. En la década de 1920, Alemania había recuperado su posición como segunda potencia industrial, aunque sus mercados exteriores eran más pequeños que antes de 1914.

Esta situación se agravó aún más con el estallido de la crisis económica mundial en 1929. La economía alemana se hundió literalmente. La proporción de desempleados alcanzó un nivel desconocido hasta entonces. Todos los bancos quebraron. La quiebra general sólo se evitó gracias a la intervención del Estado, que asumió las pérdidas de la economía privada.

De hecho, la única salida para la burguesía alemana era abrir los mercados a los que sus competidores le negaban el acceso, armas en mano, mediante una guerra. Para ello, necesitaba un Estado fuerte, capaz de reconstruir el poder militar de Alemania. Esta política de rearme debía ser una fuente directa de beneficios mediante la reactivación de la industria pesada. Pero también era un requisito

previo para recuperar los mercados extranjeros que tanto necesitaba la economía alemana.

Desde el punto de vista político, esto significaba doblegar a los trabajadores, imponiéndoles sacrificios y agravando la explotación. La burguesía, que tenía enfrente a una clase obrera numerosa y organizada, quería también evitar cualquier riesgo de una nueva revolución, como la que había provocado la guerra diez años antes.

Optando por apoyar al Partido Nazi y permitiéndole llegar al poder, la burguesía alemana se dio a sí misma los medios para realizar este programa.

Tan pronto como Hitler llegó al poder en enero de 1933, las milicias nazis, SA y SS, pudieron hacer lo que quisieron, llevando a cabo el terror, la tortura y el asesinato. Muchos trabajadores, comunistas y socialistas fueron enviados al primer campo de concentración abierto en Dachau en marzo. Ese mismo mes, el Partido Comunista fue prohibido. Tres meses después, el Partido Socialdemócrata sufrió el mismo destino. Los partidos de derecha decidieron disolverse. El Partido Nazi se convirtió en el único

partido autorizado y estableció un sistema de supervisión de la población en todos los ámbitos de la vida social.

En mayo de 1933, el patrimonio de los sindicatos se transfiere a una nueva organización, el Frente del Trabajo, que agrupa a empresarios y trabajadores en base a la empresa. La afiliación, y por tanto el pago de una cuota, era obligatoria. Se puso en marcha una verdadera militarización del mundo del trabajo. Las huelgas estaban prohibidas y cualquier disminución del rendimiento individual podía considerarse un "sabotaje a la labor de reconstrucción del Führer". En 1935 se introdujo un libro de trabajo que convertía a los empleados en personas totalmente dependientes de sus empleadores. En 1938 se introdujo un reclutamiento laboral obligatorio, por el que el trabajador debía trabajar en la empresa designada por las autoridades.

Toda la sociedad se transformó en un vasto cuartel: cualquier voz discordante era sofocada, la propaganda era incesante, con la Gestapo reinaba el terror, apoyándose en un sistema de chivatazos generalizados. Esta militarización de la sociedad fue

acompañada por la organización de una economía de guerra, con prioridad absoluta para la industria armamentística.

El Estado llevó a cabo una política de grandes obras, construyendo autopistas, ferrocarriles, aeropuertos... El objetivo era volver a poner en marcha la máquina económica a la vez que se preparaba la guerra, ya que estas carreteras también debían permitir un transporte más rápido de los ejércitos.

Este estatismo económico no se dirigió contra la burguesía y no condujo a un cuestionamiento de la propiedad privada de los capitalistas. Al contrario, antes de 1933 el Estado se vio obligado a adquirir acciones en bancos, empresas siderúrgicas y astilleros, que se vendieron al sector privado.

El Estado reforzó la cartelización de la economía bajo la dirección de los capitalistas más poderosos. Una ley de 1933 obligaba a las empresas a participar en el cártel de su rama. Y fue dentro de estos cárteles donde se organizó el esfuerzo industrial del Reich.

Otra medida consistía en imposibilitar el trabajo a los artesanos, privándoles de materias primas o de créditos. Decenas de miles de pequeños empresarios se vieron obligados a abandonar sus negocios y convertirse en proletarios; más de 100.000 artesanos se convirtieron en asalariados entre abril de 1936 y abril de 1938.

El dirigismo económico del Estado se apoyaba en las poderosas entidades industriales y bancarias del capitalismo alemán. Incluso las empresas extranjeras se beneficiaron: las filiales de General Motors, Ford, Unilever y Shell reinvirtieron todos sus beneficios en Alemania.

El Estado introdujo controles sobre el comercio exterior, que cada vez más adoptaban la forma de acuerdos de trueque. Esto no es inusual en un momento en el que, como consecuencia de la crisis, todos los Estados aplicaron una política altamente proteccionista. Pero también fue el resultado del deseo de Alemania de limitar las importaciones a lo que era esencial para la industria armamentística. Para compensar esta reducción de las importaciones, el Estado fomentó el desarrollo de productos sustitutivos, sucedáneos industriales. A

menudo eran de una calidad mediocre o francamente pésima, sobre todo cuando se destinaban al consumo popular, sacrificado deliberadamente. El líder nazi Goering proclamó que había que elegir entre el cañón y la mantequilla. Por otro lado, esta política permitió a muchos capitalistas de la industria química, metalúrgica, textil y alimentaria hacer su agosto.

El Estado financió su política imprimiendo dinero y endeudándose, una carrera precipitada hacia la guerra que se convirtió en la única forma de escapar a la debacle financiera.

El New Deal en Estados Unidos

En 1933, el año en que Hitler tomó el poder, Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión. La producción había caído al 50%. Más de un tercio de la población ocupada estaba en paro. Roosevelt, recién elegido presidente, lanzó el New Deal. Este "Nuevo Acuerdo" pretendía reactivar la maquinaria económica mediante una política estatal muy intervencionista. Sin embargo, no llegó al nivel de la estructuración nazi de la economía, pero el objetivo era el mismo: salvar a la burguesía de la quiebra de su sistema.

Roosevelt comenzó aprobando una legislación de emergencia autorizando al gobierno a prestar dinero a los bancos y creando un fondo federal de seguros para garantizar los depósitos bancarios en caso de quiebra. Creó la NAR, la Administración Nacional de Recuperación. El objetivo era establecer una forma de cártelización, en todas las profesiones, es decir, acuerdos entre grandes empresas para fijar el nivel de las cantidades de producción e, indirectamente, los precios de producción.

En el ámbito de la agricultura, para evitar la caída de los precios, el gobierno tomó medidas para

limitar la producción. En un momento en que millones de personas carecen de alimentos, la ley decidió reducir la superficie de cultivo.

Fueron muchos los pequeños agricultores del Sur que se arruinaron con la reducción de la producción; sus ingresos se redujeron drásticamente sin las subvenciones que ofrecían estos programas.

Con respecto a los trabajadores, el Estado norteamericano disponía de otros medios para llevar a cabo una política diferente a la de la burguesía alemana; no necesitaba aniquilar al movimiento obrero sino, únicamente, comprar a su burocracia. Así, la ANR propuso salarios mínimos para los trabajadores y un máximo de horas de trabajo semanales. Pero no hubo sanciones contra los múltiples patrones que no los respetaron.

Una cláusula de la ANR, la sección 7A, afirmaba el derecho de los trabajadores a entablar discusiones colectivas con sus empleadores y a afiliarse al sindicato de su elección.

El objetivo era favorecer a los sindicatos reformistas en el marco de la colaboración de clases, y canalizar el descontento de los trabajadores.

También implicaba que la burguesía accediera a hacerles un hueco, y a pagar el precio. Muchos patrones, incluso los más poderosos, eran hostiles a esto. En la industria del automóvil, por ejemplo, se necesitó una poderosa oleada de huelgas para imponer la creación de sindicatos obreros en las fábricas con el objeto de organizar a la gran masa de trabajadores.

El Estado puso en marcha obras importantes. Éstas, en su apogeo, empleaban a cuatro millones de personas, pagadas por debajo del nivel del mínimo vital para no competir con los empresarios privados. Pero la NAR no reactivó la economía. Millones de trabajadores seguían en el paro. La política del New Deal no permitió al capitalismo estadounidense salir de la crisis. En cuanto la producción se recuperó, se estrelló contra los límites del mercado, mercado que se redujo aún más por las políticas proteccionistas de todos los Estados.

El Frente popular en Francia

En Francia, el Frente Popular ganó las elecciones en mayo de 1936. Fue una alianza entre el Partido Radical, pilar de todas las combinaciones gubernamentales de la Tercera República, la SFIO y el Partido Comunista. Por primera vez, la SFIO, que había salido airoso, se encontró al frente de los asuntos de la burguesía, con el socialista Léon Blum a la cabeza del gobierno. El Partido Comunista apoyó al gobierno, sin participar en él, deseoso de tranquilizar a la burguesía. Este gobierno llevó a cabo una política similar a la del New Deal pero, al disponer de mucho menos dinero, sus intervenciones en la economía fueron finalmente bastante limitadas. Hubo algunas nacionalizaciones, pero fueron pocas y a menudo parciales, como la de la SNCF (el equivalente de Renfe en España), en la que la participación del Estado se limitó al 51%.

El Frente Popular, al igual que el New Deal en Estados Unidos, no reactivó la economía. En cambio, políticamente, hizo un gran favor a la burguesía. La crisis y sus consecuencias sociales habían provocado un incremento de la combatividad obrera que culminó con las ocupaciones de fábricas

de junio de 1936. Apoyándose en las ilusiones creadas por su llegada al poder, los dirigentes del Frente Popular condujeron la movilización obrera hacia un callejón sin salida. Muchos trabajadores, por vez primera, obtuvieron el derecho a irse de vacaciones gracias a la ley "Vacaciones pagadas", pero esperaban cambios mucho más profundos. Blum y sus aliados del PC pregonaron, entre los trabajadores, la necesidad de ser pacientes y les prometieron reformas y cambios que no llegaron. Desmoralizaron a los millones de trabajadores que habían participado en las huelgas del verano de 1936, dejándolos indefensos ante la contraofensiva patronal, que no tardó en llegar. Y finalmente, en 1939, carentes de toda perspectiva política, los trabajadores se vieron obligados a enfundarse el uniforme, movilizados una vez más para defender los intereses de sus explotadores.

A los que equiparaban la economía planificada de la URSS con el fascismo, el nacionalsocialismo y el New Deal de Roosevelt, Trotsky respondió en 1937:

“Todos estos regímenes poseen, indudablemente, rasgos comunes, que se basan, en

último análisis, en las tendencias colectivistas de la economía moderna.” Continuaba: “Por un lado, la burocracia soviética ha adoptado los métodos políticos del fascismo; por el otro, la burocracia fascista, que de momento se contenta con una intervención "parcial" de la economía, está evolucionando rápidamente hacia la total estatificación de la economía. [...] Pero que el "anticapitalismo" fascista será capaz de expropiar por completo a la burguesía es errónea. La intervención "parcial" del estado difiere de la economía planificada en la misma medida en que "reforma" difiere de "revolución". Mussolini y Hitler están "coordinando" los intereses de los propietarios privados y "regulando" la economía capitalista y, además, principalmente por razones de guerra.”

Las contradicciones del capitalismo llevaron de nuevo al imperialismo a luchar por un nuevo reparto del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. No fue el New Deal lo que reactivó la maquinaria económica estadounidense, sino el "Victory Program", una gigantesca economía de guerra desplegada a partir de 1942. En un tiempo récord, el imperialismo estadounidense se dotó de los medios

para armar y equipar a un ejército de varios millones de soldados.

El capitalismo sólo superó la crisis de los años 30 abocando al mundo en una nueva carnicería, que se saldó con más de 50 millones de muertos, con la devastación de países enteros y con el horror de los campos de exterminio. La guerra terminó tras el arrojado de dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Fueron los países considerados más civilizados, los Estados con los medios sociales más avanzados de su tiempo, los que organizaron y planificaron la muerte de millones de personas. Esto es una muestra del papel desempeñado por los Estados al servicio de la burguesía y su sistema.

La hegemonía estadounidense después de 1945

Finalizada la guerra, el imperialismo estadounidense se encontró en una posición hegemónica frente a sus competidores. El Acuerdo de Bretton Woods, firmado en 1944, impuso el dólar como moneda de referencia, la única convertible en oro y que determinaba el valor de todas las demás monedas. El imperialismo estadounidense garantizó así la estabilidad del sistema monetario internacional, condición indispensable para la reanudación del comercio entre países.

La reconstrucción requirió un esfuerzo financiero considerable. En 1947, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall. Se pusieron a disposición miles de millones en forma de préstamos por parte de los bancos estadounidenses, préstamos garantizados por el gobierno de Estados Unidos. Éste último, acababa otorgando un crédito al Estado europeo que lo necesitaba. Dicho crédito debía utilizarse para pagar bienes y servicios procedentes de Estados Unidos. Ello resultó ser un buen negocio para los capitalistas estadounidenses, no obstante,

dio a los Estados europeos los medios para intervenir activamente en la economía.

En Gran Bretaña, entre 1947 y 1949, el Estado creó una Junta Nacional del Carbón y tomó el control de la electricidad y el gas. Una Comisión de Transportes se encargó de los ferrocarriles, parte de los puertos, la mayoría de los canales, el transporte de Londres y casi todo el transporte de mercancías por carretera. A raíz de la nacionalización de la industria siderúrgica en 1951, el Estado empleó a un 10% de la mano de obra industrial.

En Francia, el Estado desempeñó un papel directo y activo en la reconstrucción de la economía del país a través de las nacionalizaciones llevadas a cabo entre 1944 y 1946: Charbonnages de France, EDF-GDF (electricidad y gas), transportes aéreos, Banque de France (cuyas tres cuartas partes ya habían sido nacionalizadas en 1936), grandes bancos y compañías de seguros, etc

Los gobiernos impusieron sacrificios a la población y el racionamiento se mantuvo hasta diciembre de 1949. Los mineros, en nombre de la batalla por el carbón, han sido obligados a trabajar en condiciones que arruinaban su salud.

Para imponer estos sacrificios a la clase trabajadora, la burguesía pudo contar con la colaboración del PCF, que participó en los gobiernos entre 1944 y 1947. Sus dirigentes condujeron a sus militantes a desempeñar el papel de control de choque en las empresas, oponiéndose a las huelgas, presentadas como "el arma de los trust", proclamando que era necesario "reconstruir primero, reclamar después". Se convirtieron así en agentes activos de la reconstrucción de la economía capitalista.

En la parte oriental de Europa, controlada directamente por la propia burocracia soviética, ésta desempeñó el papel de gendarme contra los trabajadores, reconstruyendo a partir de sus ruinas los Estados aliados de los nazis o destruidos por ellos.

En los años siguientes, el mundo fue testigo de una oleada de movilizaciones y revoluciones anticoloniales, pero quienes las protagonizaron no tenían como objetivo derrocar al imperialismo. La desaparición de los imperios coloniales puso fin a los cotos de caza, abriendo a los imperialismos más poderosos mercados que antes estaban más o

menos vedados. Sin embargo, los países ahora independientes no alcanzaron un verdadero desarrollo económico y siguieron bajo la dominación del imperialismo.

Fue la crisis de la dirección del proletariado y el papel contrarrevolucionario del estalinismo lo que permitió a la burguesía mantener su dominación, y no, desde luego, su dinamismo económico.

En Francia, una política estatista al servicio de los grandes grupos capitalistas

En Francia, la política estatista continuó más allá del periodo de reconstrucción. Los sucesivos gobiernos de la Cuarta República, y luego de la Quinta, tras la llegada de De Gaulle al poder en 1958, trataron de crear grandes grupos públicos en sectores donde la burguesía no podía ocupar el terreno invirtiendo los capitales necesarios. Así ocurrió en los sectores de la energía y el transporte, en la construcción de infraestructuras viarias, etc. En todos los casos, esto permitió a los industriales conseguir numerosos encargos estatales muy rentables. El dinero público contribuyó así a las fortunas privadas.

Para Francis Bouygues, el hecho de pertenecer al Ministerio de Reconstrucción bajo la Cuarta República, ha sido sin duda muy útil y ha contribuido a convertir su grupo en uno de los gigantes de la industria de la construcción. Sus contactos le sirvieron de nuevo en abril de 1987, cuando el gobierno decidió privatizar la principal cadena pública, TF1.

Entre los grandes empresarios, Ambroise Roux fue uno de los defensores de la liberalización de la economía, criticando el "corsé público". Esto no le impidió aprovechar los vínculos establecidos desde hace tiempo con el Estado. Comenzó su carrera como asesor técnico, luego director de gabinete del ministro de Industria a principios de los años 50, antes de ponerse al frente de la Compagnie Générale d'Électricité (CGE), antecesora de la actual Alcatel, un grupo cuya actividad dependía en gran medida de los contratos públicos.

Toda la organización de la aeronáutica francesa nació de un reparto de roles establecido en 1949 entre el sector público, al que se devolvió el sector altamente competitivo de la aviación civil, y el sector privado, que se aseguró el monopolio del sector ultra protegido de la aeronáutica militar y de los pedidos del Estado. Hecho que confirma que a los capitalistas no les gusta en absoluto el riesgo. Eso es lo que ocurre en particular con la familia Dassault, cuyas empresas fabrican los aviones de combate del ejército francés, desde el bien llamado Vautour (buitre) hasta el Mystère y el Rafale.

En 1965 se crea la Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (Erap), empresa que agrupa todas las actividades petroleras del Estado, y que dos años más tarde pasa a llamarse Elf-Erap (Elf de Essences et lubrifiants de France, de gasolina y lubricantes de Francia). El grupo desarrolló sus actividades en África, en Gabón, saqueando las riquezas petrolíferas, estableciendo relaciones muy estrechas con los dictadores locales, y en relación estrecha, igualmente, con el Palacio del Elíseo.

Se convirtió en uno de los pilares de la llamada Françafrique, con su red de secuaces, ayudando a mantener bajo control a los países del antiguo imperio colonial. También ha sido la fuente de ingresos de toda la clase política, con fondos para sobornar a todos los partidos gravitando alrededor del poder. En 1999, Elf se había convertido en una de las mayores empresas francesas. Esto ha bastado para despertar la codicia de su antiguo competidor privado, la ex-Compagnie française des pétroles (CFP), rebautizada como Total Fina, que absorbió a Elf en febrero de 2000 y que dio lugar al actual grupo Total. Este es un ejemplo de las diferentes formas que utiliza el Estado para servir a la burguesía: primero creando Elf que, como

empresa pública, siempre ha trabajado al servicio de los intereses del imperialismo francés, y luego permitiendo que esta empresa tan rentable sea adquirida por el capital privado.

La nacionalización de la industria siderúrgica a finales de los años 70 es otro ejemplo de cómo el Estado pudo salvar la situación de los industriales ricos.

En octubre de 1978, bajo la presidencia de Giscard, el gobierno de derechas, dirigido por Raymond Barre, anunció la nacionalización parcial de la industria siderúrgica. El Estado francés, que había concedido más de 20.000 millones de francos de ayuda a los distintos grupos siderúrgicos en pocos años, decidió transformar sus deudas y las de los organismos públicos en inversiones de capital. El Estado se convierte así en accionista con el 80% del capital de las principales empresas siderúrgicas de la época, Usinor y Sacilor-Sollac. El Estado estaba organizando un rescate forzoso, ya que la familia Wendel, que dirigía Sacilor-Sollac, habría tenido grandes dificultades para evitar la quiebra.

Como lo relató más tarde Jean Gandois, que fue director general de Sacilor a partir de 1972 y

luego director general de Sollac hasta 1976: *"Las denuncias de las maniobras del Estado, los gritos de horror de la familia, todo eso era una vasta farsa. De hecho, los Wendel llevaban mucho tiempo intentando deshacerse del sector siderúrgico. Ya no era rentable. El Estado organizó el rescate y les permitió salvar el resto de su fortuna. No perdieron ni un céntimo en el trato. Y eso era lo más importante."*

De hecho, un año antes del rescate estatal, la familia había reorganizado su capital con la aprobación del primer ministro. El grupo familiar se dividió en dos empresas: por un lado, la siderurgia en declive, y por otro, las actividades rentables agrupadas en una nueva estructura, la Compagnie générale d'industrie et de participations (CGIP). De este modo, cuando el Estado se hizo con el control de Sacilor, se consiguió la separación de bienes, el truco surtió efecto.

Desde los años 70, el capitalismo en crisis

Con el inicio de la crisis en los años 70, los capitalistas se mostraron cada vez más reacios a inmovilizar su capital en actividades productivas. En Francia, durante estos años, la inversión industrial global no disminuyó en su conjunto gracias únicamente a la inversión pública, que aumentó más del 10%, por el contrario, la inversión privada disminuyó.

Pero estar empleado en una empresa controlada por el Estado no era una garantía para evitar el despido. Los trabajadores pudieron experimentar esto a gran escala cuando la izquierda llegó al poder. Tras la elección de Mitterrand en 1981, el gobierno de Mauroy nacionalizó los cinco mayores grupos industriales, dos grandes instituciones financieras, Suez y Paribas, y 39 instituciones bancarias.

Estas nacionalizaciones habían sido presentadas por la izquierda como una forma de "cambiar la vida", de implantar una gestión diferente a la de los capitalistas. El Partido Comunista, que

participó en los gobiernos de izquierda hasta 1984, contribuyó, en particular, a alimentar esta ilusión entre los trabajadores. En todas las empresas, y más aún en las nacionalizadas, sus militantes explicaron que había que dar tiempo al gobierno de izquierdas y no ponerle obstáculos con la huelga. Desarmaron a los trabajadores que rápidamente fueron sometidos a la austeridad de la izquierda. En las empresas nacionalizadas, el Estado se encargó de la reestructuración, asumiendo el coste financiero y despidiendo a miles de trabajadores en la industria siderúrgica —completando el trabajo sucio de los anteriores gobiernos de derechas en este sector—, la electrónica, las telecomunicaciones...

No fueron los accionistas de estas empresas quienes pidieron esa nacionalización, sino quienes la aceptaron sin lamentarlo. Fueron generosamente compensados sobre la base de estimaciones sobrevaloradas y pudieron poner su capital a trabajar en sectores considerados más rentables.

La financiarización de la economía y sus consecuencias

La presión del capital en busca de inversiones con beneficios rápidamente realizables ha llevado a los Estados de todo el mundo a emprender la privatización de las empresas bajo su control. En Francia, esto comenzó a finales de los años 80 con el regreso de la derecha al poder. Posteriormente, el gobierno dirigido por el socialista Jospin, en el que volvieron a participar representantes del Partido Comunista, continuó el movimiento. Si estas privatizaciones masivas permiten a los capitalistas hacerse con empresas que son inmediatamente rentables, sin embargo, muchos de ellos, estaban sencillamente interesados por las perspectivas de realizar lucrativos negocios bursátiles.

Efectivamente, con la agudización de la crisis aumentó la financiarización de la economía, lo que permitió a la burguesía seguir desarrollando sus beneficios sin tener que invertir en actividades productivas con rendimientos más azarosos. Por ello, la burguesía exigió al Estado una política que le permitiera disponer de grandes cantidades de dinero a su antojo.

A partir de los años 90, las ayudas financieras a las empresas han adoptado cada vez más la forma de subvenciones, créditos fiscales, reducciones de las cotizaciones a la seguridad social, etc. Es muy difícil, por no decir imposible, evaluar el importe total de estas ayudas financieras permanentes, ya que en este ámbito existe una carencia de transparencia conveniente tanto para el Estado como para las empresas.

Uno de los últimos informes sobre el tema, elaborado en 2013 por el socialista Jean-Jacques Queyranne, expresidente de la región de Ródano-Alpes, estimaba que todas estas ayudas representaban un gasto anual de 110.000 millones de euros. En 2018, el departamento económico de la CGT arrojó una cifra de 200.000 millones de euros anuales, apenas inferior a la del presupuesto del Estado, que fue de 241.500 millones de euros ese año. Esta cifra sigue estando por debajo de la realidad, ya que no tiene en cuenta las ayudas concedidas por las administraciones locales, que representan al menos decenas de miles de millones de euros gastados cada año bajo formas muy diversas: subvenciones, puesta a disposición de edificios, terrenos con servicios, acondicionamiento

de vías de acceso a las empresas, ayudas a la formación profesional, etc. Y aún hay que añadir las subvenciones europeas, que son difíciles de contabilizar.

El fuerte aumento entre 2013 y 2018 se explica en gran medida por la creación del Crédito Fiscal para la Competitividad del Empleo (CICE) al inicio del quinquenio de Hollande, una rebaja fiscal equivalente al 6% de la masa salarial, para los salarios inferiores a dos veces y media del salario mínimo. Todas las empresas podían beneficiarse de ello, incluso las que tenían beneficios. Nada les impedía recortar puestos de trabajo, y muchos de ellos lo hicieron: Carrefour, Auchan, Renault, por solo citar algunas.

Gracias a este dispositivo, las empresas se han beneficiado de un total de más de cien mil millones de euros, pero, según un informe oficial, solo 256 grandes empresas habrían captado casi la mitad de la CICE en 2016. En 2019, con Macron, el dispositivo pasó a ser duradero, mediante su sustitución por una reducción permanente de las cotizaciones para los empresarios.

Hubo un tiempo en el que la financiación pública estaba destinada a ayudar a la burguesía proporcionándole encargos estatales, aunque al menos también permitía construir puentes, autopistas, equipos electrónicos y telefónicos, y centrales nucleares, que, independientemente de lo que se piense de ellas, al menos producían electricidad. Este ya no es el caso en absoluto. Estas ayudas no tienen ningún efecto sobre el empleo, que es el pretexto que esgrimen los gobiernos para justificarlas. Las sumas cada vez más elevadas que se pagan a los empresarios cada año alimentan, únicamente, la especulación, elevando así la amenaza de una crisis financiera con efectos devastadores.

Mientras la crisis sigue agravándose, este saqueo de los fondos públicos ha llevado al Estado a endeudarse cada vez más, y la deuda pública francesa pasará de 200.000 millones de euros en 1986 a más de 2.600.000 millones a finales de 2020. El sector financiero ha impuesto al Estado una obediencia absoluta inmiscuyéndose en todos los ámbitos. Desde la sanidad hasta la educación, todo

lo que podía ser una fuente de beneficios tenía que ser accesible para ella. Todos los gobiernos, de derechas y de izquierdas, han empujado a las autoridades locales y a los hospitales a recurrir al endeudamiento. Sumidos en una espiral de sobreendeudamiento, los hospitales se encontraron con que dedicaban una proporción cada vez mayor de sus recursos para pagar sus deudas, privándose así de los medios para atender a los pacientes. Mientras, para que la burguesía siga beneficiándose de esta asistencia pública, el Estado ha tratado de ahorrar a costa de los servicios públicos fundamentales para la población. La actual crisis sanitaria muestra las desastrosas consecuencias del estado de indigencia al que se ha reducido a los hospitales y las EHPAD (residencias de ancianos medicalizadas).

En nombre de esa política de ahorro, las prisiones, los hospitales, los estadios, los juzgados, las universidades, los nuevos edificios del Ministerio de Defensa, las líneas de tren de alta velocidad, prácticamente, todos los grandes proyectos públicos desde 2009, se han realizado en el marco de la colaboración público-privada (PPP, Partenariat Public Privé). Los grupos de construcción entregan

las obras al Estado, que les paga una cuota anual. Es una oportunidad para que las grandes empresas saqueen al erario público. Así, si la construcción del nuevo palacio de justicia de París, realizada en el marco de una PPP, se estimó en algo más de 700 millones de euros, el Estado deberá pagar más de tres mil millones de euros en veintisiete años.

Hoy, el parasitismo de la burguesía ha llegado a tal nivel que impide al Estado de asumir tareas de interés general. La supervivencia de una parte de la sociedad está amenazada. Toda la sociedad está pagando esta política con una regresión general.

Un Estado completamente al servicio de la burguesía

Cualquier variante de políticos reformistas miente cuando afirma que este Estado podría llevar a cabo una política diferente. Este está completa e incondicionalmente al servicio de la clase dominante porque está vinculado a ella de muchas maneras.

La perennidad del aparato estatal y de su acción se ilustra por el cuidado prestado a la formación de sus ejecutivos. La Escuela de "Ponts et Chaussées" (Puentes y Caminos) fue creada en 1747, bajo la monarquía absoluta. La escuela "Polytechnique" (Politécnica) fue fundada en 1794, durante la Revolución, y militarizada en 1804 por Napoleón. Últimamente se ha hablado mucho de la ENA, la Escuela Nacional de Administración, pero, creada en 1945, es sólo una más entre varias. Todas estas escuelas forman a los principales dirigentes del estamento político, administrativo y económico de la burguesía. Se codean, se conocen e integran redes de influencia que les servirán a lo largo de su carrera.

Aunque no sea nueva, esta compenetración entre la burguesía y las altas esferas de la

administración pública se ha consolidado. Máxime cuando, para beneficiarse del dinero público, es absolutamente necesario mantener vínculos muy estrechos con las altas esferas del Estado.

Los asesores más destacados y los altos funcionarios en los puestos más importantes son cortejados y avasallados por las proposiciones. Se establece un patrón: con cada cambio de gabinete ministerial, la mayoría de los asesores se van al mundo empresarial. Las idas y venidas entre el sector público y el privado se han convertido en la norma. Para las empresas, contar con un antiguo ejecutivo del gabinete ministerial es la garantía de estar entre los iniciados, los que conocen los proyectos del gobierno, las discusiones, las preocupaciones de la cúpula del Estado, antes que los demás; de estar en mejor posición para influir en los expedientes y obtener contratos.

Si el mundo de los bancos está particularmente bien representado en esta interpenetración, ello se debe al papel predominante que han adquirido las finanzas en la economía capitalista. Y esto no es la consecuencia de la elección de Macron. Antes de ser primer ministro de De Gaulle, y luego presidente de

la República, Georges Pompidou fue banquero en Rothschild y conocía bien el mundo de los negocios.

La derecha, que estuvo en el poder durante veinticinco años a partir de 1958, tuvo, durante mucho tiempo, relaciones privilegiadas con los círculos patronales, pero la izquierda pudo compensarlo tras la elección de Mitterrand en 1981. Hay muchos ejemplos, pero basta con mencionar a una de sus principales figuras en el PS, Martine Aubry. Tras cursar estudios en la ENA e iniciar una carrera a alto nivel en la administración pública, en el Consejo de Estado, la hija de Jacques Delors, se incorporó al ministerio del Trabajo en calidad de ministra del Trabajo de Mitterrand. Tuvo que dejarlo tras el regreso de la derecha al poder. Entre 1989 y 1991, trabajó para el grupo industrial Pechiney, como subdirectora de su director general, Jean Gandois, con quien según dicen se hizo amiga. A su vez, Gandois, al convertirse en presidente del CNPF en 1997 (el equivalente a nuestra CEOE), encontró a su antigua colega al frente del Ministerio del Empleo.

El Partido Comunista, por su parte, fue mantenido durante mucho tiempo alejado del poder. Durante décadas, sus vínculos con la URSS y los

que mantuvo con la clase obrera a través de su aparato militante limitaron sus posibilidades de integración. La burguesía no confía lo suficiente en él como para darle un acceso duradero a las responsabilidades ministeriales. Pero, a lo largo de su participación junto al PS, el PC demostró que se había convertido en un partido de gobierno. En el ámbito local, esta evolución es, en cierto modo, aún más perceptible porque, durante mucho tiempo, sus representantes electos -diputados, alcaldes, consejeros regionales y departamentales- han participado en los ejecutivos locales o han estado asociados a la gestión de los asuntos. El hecho de que éstos hayan adquirido un papel preponderante en la vida interna del PC, en detrimento de los militantes obreros, es otro síntoma de la profundidad de esta integración en las instituciones de la burguesía.

Por último, cuando hablamos de la forma en que el aparato estatal defiende el orden social, debemos hablar también de las burocracias sindicales, cuya existencia depende hoy estrechamente de las instituciones de la burguesía. En Francia, esto se hace en el marco del llamado sistema paritario social. Los sindicatos participan,

junto con los representantes de los empresarios, en la gestión de los organismos de la seguridad social, el seguro de desempleo y la formación profesional. En muchas instituciones creadas por el Estado, como los consejos económicos y sociales nacionales o regionales, en los que un tercio de los puestos de consejeros están reservados a los sindicatos. Y eso sin contar con todos los puestos fijos financiados por las grandes empresas, con lo cual están supeditados a la buena voluntad de los empresarios, pero también de los legisladores, que pueden cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, como hemos visto recientemente con la reforma que sustituye a los comités de empresa (CE) por los comités sociales y económicos de empresa (CSE), lo que ha provocado una importante reducción del número de representantes elegidos en muchas empresas.

La integración de los aparatos reformistas en la sociedad burguesa es tal que se han convertido realmente en uno de los engranajes del aparato estatal.

En agosto de 1940, en *Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista*, Trotsky señaló:

“[Los sindicatos] no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”

Expropiar a la burguesía

Hoy que el capitalismo está sumido en una crisis de la que no logra salir, el problema se plantea en los mismos términos. La burguesía sólo puede mantener sus beneficios reduciendo la parte de la riqueza que corresponde a los trabajadores, reforzando la explotación, destruyendo puestos de trabajo, reduciendo la masa salarial.

La crisis actual revela hasta qué punto la burguesía se ha convertido en una clase parasitaria. Efectivamente, ¿Cuál es su utilidad? El Estado tiene que pagar los sueldos de una parte de los asalariados, tiene que poner miles de millones sobre la mesa para "sostener la economía", explican los mismos ministros que consideran justificado reducir los subsidios destinados a los parados, reducir aún más las pensiones de jubilación etc. Mientras los trabajadores, los artesanos, los agricultores, los pequeños comerciantes, ven cómo se deterioran sus condiciones de vida, los especuladores ganan miles de millones, duplicando, triplicando sus fortunas gracias a la subida de las cotizaciones. Este enriquecimiento de una minoría amenaza a la

economía mundial con una crisis financiera de consecuencias devastadoras.

La crisis actual revela hasta qué punto la burguesía se ha convertido en una clase parasitaria. Efectivamente, ¿Cuál es su utilidad? El Estado tiene que pagar los sueldos de una parte de los asalariados, tiene que poner miles de millones sobre la mesa para "sostener la economía", explican los mismos ministros que consideran justificado reducir los subsidios pagados a los parados, reducir aún más las pensiones de jubilación... A la vez que los trabajadores, los artesanos, los agricultores, los pequeños comerciantes, ven cómo se deterioran sus condiciones de vida, los especuladores ganan miles de millones, duplicando, triplicando sus fortunas gracias a la subida de las cotizaciones bursátiles. Este enriquecimiento de una minoría amenaza a la economía mundial con una crisis financiera de consecuencias devastadoras.

Como la nobleza en 1789, la burguesía se ha convertido en una clase inútil y perjudicial. Hay que derrocar a estos privilegiados que viven como parásitos del conjunto de la sociedad.

Para que la sociedad reanude con su camino hacia adelante, para que los formidables progresos de la ciencia y de la técnica sean utilizados en beneficio de la humanidad, es indispensable que la burguesía sea expropiada; también para que la economía deje de estar regida por la ley del mercado, por la dictadura del beneficio impuesta por los accionistas. Esta es la tarea histórica de los trabajadores, la única clase que no tiene interés en mantener la propiedad privada. Al tomar el poder, los trabajadores podrán reorganizar la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y distribución, con el único objetivo de satisfacer las necesidades del mayor número de personas, procurando la preservación del medio ambiente y el futuro del planeta.

Los trabajadores necesitarán un estado que sea suyo, que puedan controlar, un estado similar a lo que fueron la Comuna de París y los soviets durante la revolución rusa. La evolución de este estado obrero estará ligada a la del resto de la sociedad. Y estamos convencidos de que desaparecerá al mismo ritmo que desaparezcan las clases sociales, la explotación y todas las formas de opresión.

Compartimos la convicción expresada por Engels al final de su libro *El origen de la familia, la propiedad y el Estado*:

“La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce.”